Imprimir

Al tiempo que avanzan los eventos del Acuerdo Nacional propuesto por el Presidente Gustavo Petro, hay gran expectativa entre los movimientos sociales sobre el papel de las organizaciones populares en los anunciados “Diálogos regionales vinculantes”, que además de ser espacios de la construcción del próximo Plan de Desarrollo serán escenarios para retomar y profundizar la paz completa, construir la reforma agraria democrática, organizar la Renta básica, los subsidios a las madres cabeza de hogar, las nuevas formas de participación ciudadana y abordar los problemas de orden ambiental, especialmente los de la deforestación, la destrucción de las fuentes de agua y los ecosistemas estratégicos (humedales, zonas de reserva).
El punto de referencia de los denominados “Diálogos regionales vinculantes” (así como del triunfo de Gustavo Petro) es la histórica y potente movilización del pueblo colombiano en los últimos 36 meses, que incluye huelgas universitarias, paros cívicos y rebeliones generalizadas contra el sistema neoliberal, el régimen despótico de la masacre y el exterminio de líderes sociales y la sistemática corrupción contra los recursos del Estado y el gobierno.

Para entrar en materia, la cuestión consiste en la elaboración de unos escenarios de diálogos territoriales que ofrezcan todas las garantías para el movimiento popular y sus reivindicaciones. De lo que se trata es de adelantar unos diálogos cargados de ética, de estética y de construcción de las nuevas subjetividades que exige un proyecto de cambio que supere el actual orden oligárquico como el planteado por el presidente Gustavo Petro.

Los diálogos regionales, distritales y locales deberán atender las especificidades demográficas, culturales, políticas e institucionales de cada territorio. Acá queremos hacer referencia a un espacio que reclama ese dialogo con urgencia; el mismo que ha visto en los últimos tres años gigantescas movilizaciones agrarias, indígenas y afros desde el sur del Meta, organizadas por las asociaciones agrarias del Guayabero y el Ariari ubicadas en los municipios de Vistahermosa, Macarena, Uribe, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Lleras, la Julia y Puerto Rico, arrastrando núcleos campesinos del norte del Caquetá (San Juan del Lozada y San Vicente del Cagua, así como sectores del Departamento del Guaviare (Retorno

y Calamar).

En estos momentos la población campesina de esta zona del Meta es objeto de una violenta arremetida de un dispositivo militar organizado desde la visión del pentagonismo gringo, se trata de la Fudra Omega y de su Plan Artemisa, que ha tenido graves impactos en los derechos humanos de las comunidades y sus líderes objeto de asesinatos, destrucción de viviendas, masacres y despojo de bienes y tierras por parte de los integrantes de la Fuerza Pública, que actúan en complicidad con los grupos neo paramilitares (Cuchillitos, Puntilleros, Centauros, Urabeños, Carranceros, Buitragueño y Héroes macacos del Vichada), orquestados desde los batallones y los comandos de la policía del Meta.

Por supuesto, un dialogo que abarque todo el departamento del Meta debe proyectar la articulación del aglomerado indígena de Puerto Gaitán (Zikuanis y Guahibos) y las comunidades campesinas del Piedemonte llanero (Paramo del Sumapaz) ligadas a la defensa del agua y los recursos ambientales.

Realizar diálogos territoriales en el Meta y sus subregiones plantea la necesidad de adelantar una rigurosa desmilitarización del territorio y unos cambios en las cúpulas militares y policiales del área, dada la penetración del neo paramilitarismo en esas instancias y la hegemonía de la ideología contrainsurgente anticomunista del “enemigo interno” que lleva a que se considere a los cocaleros como los enemigos del Estado que deben ser arrasados.

Este es un punto clave en los nuevos diálogos regionales para crear confianza entre la población campesina y sus organizaciones.

Por supuesto hay otros temas de gran valor como el de la reforma agraria democrática que entregue miles de hectáreas a los campesinos con todos los apoyos necesarios en materia de infraestructura, organización de cadenas productivas, apoyos tecnológicos (distritos de riego, innovación biológica), apoyos a la agricultura familiar, educación, salud, internet, jurisdicción agraria, etc.

El tema de la protección del bosque amazónico es un punto cardinal con la organización de

servicios ambientales y la adopción de “emergencias climáticas” por parte de las autoridades municipales. Este es un asunto que demanda mucha prioridad dada la grave deforestación que está destruyendo la amazonia colombiana en el Meta y el Guaviare.

Asunto definitivo de estos diálogos es la democratización del campo político regional implementando todos los mecanismos de participación ciudadana previstos en los Acuerdos de paz, como las Veedurías ciudadanas y las auditorias sociales para que ejerzan un control efectivo sobre los procesos de contratación y ejecución de las obras de infraestructura y de apoyo a las comunidades. Democratizar el Meta implica propiciar la emergencia de nuevas subjetividades alternativas a las maquinarias clientelistas tradicionales en cabeza de los Carmelos, Doña Maritza Ortiz y el impresentable Alan Jara, el mismo del robo a una fantasmática refinería que echo por la alcantarilla miles de millones de pesos de las Regalías petroleras.

En el Meta ya se están conformando Grupos de impulso a los diálogos regionales vinculantes que ojalá tengan el apoyo del nuevo gobierno petrista de Bogotá.

Horacio Duque